

*Plaza pública*

para la edición del 19 de marzo de 1995

## Asaltos

Miguel Ángel Granados Chapa

El hijo mayor del Presidente Zedillo fue asaltado, el miércoles 15, cuando viajaba en su automóvil con un compañero de estudios, rumbo a la escuela. Se trataba de despojarlos de sus pertenencias, en un episodio como los que ocurren cada vez con mayor frecuencia en la ciudad de México. El percance no tuvo consecuencias, pues la escolta que por discreción se mantenía a distancia del vehículo, apenas se impuso de lo que sucedía dominó la situación y detuvo a los atracadores. No he visto que se publique ninguna información sobre lo sucedido, no obstante su gravedad, si bien circula una versión de que los frustrados asaltantes son miembros de la policía judicial del estado de México, que actúan sobre todo en Guerrero y el Distrito Federal. Se presume que pertenecen a una banda que habría sido la que agredió y asaltó a varios de los personajes públicos a que me referí en este lugar el jueves pasado.

Sin embargo de esa detención, todavía esa misma noche se produjo un nuevo episodio del mismo carácter. Sergio Sarmiento, el inteligente y activo columnista, autor de "Jaque Mate", en *Reforma*, fue secuestrado durante largas horas, hasta avanzada la mañana del viernes 17. Fue interceptado cuando se dirigía al Canal Trece, en cuyo elenco de comentaristas figura, y sus

asaltantes lo forzaron a girar cheques contra su cuenta en Comermex. Una técnica semejante había sido aplicada semanas atrás contra el también periodista Salvador Minjares (cuya señora madre falleció el viernes), que escribe para *La Prensa*, a quien obligaron a extender documentos cobrables en el Banco del Atlántico.

En los círculos gubernamentales no hay plena concidencia sobre el carácter de esos acontecimientos. Hay quienes suponen que se trata de una serie de hechos unidos por un lazo común, destinados a procurar una desestabilización política, mediante la vía de mostrar a un gobierno incapaz de poner orden no sólo en la economía sino también en la calle, en la vida cotidiana. Otra posición consiste en ofrecer a tales acciones delictuosas una explicación más general, y considerar que se trata de incidentes aislados, inconexos, que reflejan el incremento de la delincuencia, motivada a su vez por la situación económica general, cuya combinación de carestía y desempleo lanza a la desesperación a miles de personas, o favorece la realización de delitos patrimoniales o contra la libertad de las personas con fines lucrativos.

Un ejemplo llamativo de esto último lo constituye el caso de la familia norteamericana de origen indostano que publica un aviso dirigido a los secuestradores de su hijo Sunil Punjabi, desaparecido el 21 de febrero del aeropuerto de la ciudad de México, a donde había llegado procedente de Laredo. Dos semanas más tarde, una persona llamó a la familia Punjabi diciendo que tenía consigo al muchacho, pero no ha vuelto a

comunicarse, y el padre de la víctima reclama una prueba de que está vivo a fin de considerar las condiciones para el rescate. Otras varias personas, también sustraídas de su vida cotidiana, están a merced de sus captores, en la ciudad de México u otros lugares del país, que esperan el momento de canjear a sus rehénés por gruesas sumas de dinero.

Alguna violencia tiene claros nexos con la alta delincuencia organizada, y sus derivaciones apuntan hacia móviles políticos que probablemente se esclarezcan pronto. Es el caso, por ejemplo, del asesinato del probo director del penal de La Mesa, en Tijuana, Jorge Alberto Duarte Castillo, asesinado hace dos semanas, cuando volvía a su casa, en un automóvil compacto, de regreso de enseñar derecho penal en la Universidad local. Se ha acusado de ser el autor intelectual del homicidio al recluso de aquel establecimiento Antonio Vera Palestina, ex agente policiaco y miembro del personal de seguridad del Hipódromo de aquella ciudad fronteriza, concesionado a Jorge Hank Rhon. Vera Palestina purga una sentencia por el asesinato de Héctor Félix, el periodista apodado *El Gato*, que con Jesús Blancornelas dirigía el influyente semanario Zeta en Tijuana. El homicidio de Duarte podría a su vez tener relación con el de Federico Benítez, jefe de la policía municipal tijuanaense, ocurrido hace once meses, y cuya relación con el asesinato de Luis Donald Colosio va configurándose de modo inequívoco. Tal vez el próximo jueves, cuando se cumpla un año del atentado contra el candidato

presidencial priísta, se conocerían al menos las articulaciones entre esos asesinatos, que sólo pudieron ser organizados por un poder eminente y bien dotado de recursos financieros, tan grandes como su inescrupulosidad.

Cualquiera que sea la causa de la actual fase de inseguridad (pretensiones de desestabilización o deterioro de la situación económica), lo cierto es que no contribuirá a aliviarla la puesta en práctica del plan de choque, que generará consecuencias económicas y políticas de gran alcance. Así empezó a percibirse durante el proceso de aprobación de la nueva tasa al impuesto al valor agregado.

El autor de la iniciativa, el Presidente Zedillo, tuvo que emplearse a fondo para contener la inconformidad de los legisladores priístas con el incremento de cincuenta por ciento (de 10 a 15 por ciento) a la tasa del IVA, y persuadirlos de votar en pro de este ajuste, "porque no hay de otra". El propio Ejecutivo federal, sin embargo, tuvo que enfrentar el viernes, en Durango, una muestra de la irritación social causada por la medida (así como por el resto del plan de ajuste), cuando una pequeña multitud de panistas lo increpó con gran violencia verbal. Dos días antes, como hemos dicho, el doctor Zedillo había sido perturbado por el incidente ocurrido a su hijo, de modo que en breve lapso quedó enfrentado a muestras concretas de lo que ocurre en la calle, algo que no es siempre percibido con claridad desde el poder. No obstante esas involuntarias tomas de pulso de la situación nacional, el Presidente permanece

inconmovible en su decisión de aplicar el plan que corresponde al ideario del Fondo Monetario Internacional. Y como si se tratara de un asunto más de voluntad que de inteligencia, más de valentía que de cordura, dijo que "no le temblará la mano" para poner en práctica el programa, uno de cuyos fines es la creación o mantenimiento del superávit gubernamental.

Si en el pasado reciente todo el esfuerzo de la política económica se dirigió al abatimiento de la inflación, a cualquier precio, ahora el desideratum, en cuyas aras todo se sacrifica, es el equilibrio de las finanzas gubernamentales. A ese propósito se dirigió el dictamen de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que condujo a la aprobación de un IVA mayor, cuyo crecimiento puede ser anulado por sí mismo, ya que esa medida (con el desempleo y la carestía) reforzará la tendencia hacia un menor consumo y por lo tanto puede disminuir la recaudación, en vez de que se incremente su cuantía.

El dictamen incluyó una sorpresiva propuesta, destinada a que se valore la supresión de cuatro secretarías de Estado, las de Turismo, Energía, Reforma Agraria y Contraloría. La sorpresa surge por el momento en que se formula la proposición, no porque contradiga el credo del sector político que hoy gobierna, radicalmente contrario al estatismo. Al menos por su inoportunidad, y por su ineficacia respecto de los fines expuestos, será pertinente el rechazo de esa impertinente recomendación. El personal de base de las dependencias puestas en jaque tendría que ser reubicado en las oficinas

que recibieran las funciones respectivas, pues tales funciones no pueden ser responsablemente suprimidas. O se le lanzaría al desempleo, alimentando de ese modo las vastas huestes de quienes no pueden, con su trabajo honesto, asegurar a sus familias la casa, el vestido y el sustento que constituyen los mínimos indispensables para subsistir. Claro que es materia de discusión la idea de que el Estado debe ser o no un significativo empleador, y en qué magnitud; pero abrir el debate correspondiente en estos precisos momentos, es tan inoportuno como discutir, ante el riesgo de un naufragio, si los grumetes de una embarcación tienen derecho o no a permanecer en la cubierta.

¿Puede permitirse el gobierno el lujo de no promover la afluencia de corrientes turísticas a nuestro país, tan necesitado de las divisas que traen consigo? ¿Puede abandonarse la resolución del rezago agrario, fuente de tantos conflictos sociales, rayanos a menudo en la violencia? ¿Es posible desregular a tal punto la producción y el consumo de energéticos que sea dable prescindir de la autoridad correspondiente? Aparte los controles legislativos del caso, ¿es saludable o no que se vigile el gasto público y se racionalice la actividad administrativa?

En esas preguntas se resumen, en sentido contrario, algunas de las atribuciones asignadas a las oficinas cuya eliminación ha quedado planteada. Si la fe neoliberal del Estado mínimo es obsequiada con tal supresión, pueden generarse problemas mayores que los implicados en el costo que se desea evitar. Y si las responsabilidades

inherentes a cada caso son transferidas otras oficinas, es previsible al menos un periodo de ineficacia por los ajustes operativos que los ensambles de este género provocan inevitablemente.

En realidad, frente a los muchos inconvenientes de suprimir estas oficinas al socaire de la emergencia económica, queda claro que el degüello de este personal burocrático es un ofrecimiento hecho al antiestatismo de un importante sector de la población, y fue una fallida tentativa de revertir el voto panista sobre el incremento del IVA. De conseguirlo, el gobierno y su partido habrían podido atenuar en gran medida el desgaste político, y aun el desprestigio de haber remado a contracorriente a fin de sacar adelante una política a la que son ajenos la mayor parte de los legisladores priístas, incapaces sin embargo de organizar su descontento.

Las tres fracciones minoritarias en la Cámara de Diputados se manifestaron el viernes, sin fisuras, contrarias a la nueva tasa del IVA. Reprodujeron, de ese modo, su rechazo a los planes económicos gubernamentales, ya expresado ante el paquete de asistencia financiera originado en la casa Blanca. esta vez ni los senadores panistas discordaron de la generalizada actitud opositora. Como en San Lázaro, también en Xicoténcatl, ayer, sólo el voto priista aprobó el incremento fiscal, que es aprobar el secamiento de la actividad productiva. En ambas cámaras, un breve número de legisladores miembros del partido oficial rompieron la disciplina partidaria. Independientemente de sus móviles específicos (así como de su biografía y de

su talante), su actitud muestra una mejor sintonización con el sentir general que la del resto de sus compañeros, y el Presidente de la República.

Por fortuna, esa insensibilidad ha ido cediendo en el otro frente de combate político del gobierno, el del conflicto chiapaneco. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional respondió afirmativamente a la propuesta de nuevo diálogo, y si bien mantiene sus reticencias respecto de la presencia militar en la zona litigiosa y acerca de facultades discrecionales del Ejecutivo, accedió a reanudar el intercambio epistolar con la Secretaría de Gobernación. Ese paso revela que se han depuesto, así sea sólo con fines operativos, las desconfianzas provocadas el 9 de febrero.

Igualmente es importante, en la nueva posición del EZLN, su aval a la comisión legislativa, y a su producto, la de concordia y pacificación. Al quedar integrada la primera, los zapatistas la objetaron, pues la consideraron no órgano imparcial sino acorde con su enemigo, por estar integrada por miembros de partidos antagónicos a su movimiento. Hoy han afirmado que el cometido del grupo parlamentario va más allá de la militancia de sus miembros, lo que probablemente manifiesta un reconocimiento a la fluidez con que se procesaron dentro de la comisión los delicados temas de la pacificación chiapaneca. Es también un reconocimiento a la muy criticada, pero a mi juicio plausible, capacidad presidencial de no aferrarse en este conflicto a una sola opción, sino rectificar cuando sea necesario y oportuno.

Domingo 19 de marzo de 1995, REFORMA

# Asaltos

Cualquiera que sea la causa de la actual fase de inseguridad (pretensiones de desestabilización o deterioro de la situación económica), lo cierto es que no contribuirá a aliviarla la puesta en práctica del plan de choque, que generará consecuencias económicas y políticas de gran alcance.



El hijo mayor del presidente Zedillo fue asaltado, el miércoles 15, cuando viajaba en su automóvil con un compañero de estudios, rumbo a la escuela. Se trataba de despojarlos de sus pertenencias, en un episodio como los que ocurren cada vez con mayor frecuencia en la ciudad de México. El percance no tuvo consecuencias, pues la escolta que por discreción se mantenía a distancia del vehículo, apenas se impuso de lo que sucedía dominó la situación y detuvo a los atracadores. No he visto que se publique ninguna información sobre lo sucedido, no obstante su gravedad, si bien circula una versión de que los frustrados asaltantes son miembros de la policía judicial del estado de México, que actúan sobre todo en Guerrero y el Distrito Federal. Se presume que pertenecen a una banda que habría sido la que agredió y asaltó a varios de los personajes públicos a que me referí en este lugar el jueves pasado.

Sin embargo de esa detención, todavía esa misma noche se produjo un nuevo episodio del mismo carácter. Sergio Sarmiento, el inteligente y activo columnista, autor de "Jaque Mate", en *Reforma*, fue secuestrado durante largas horas, hasta avanzada la mañana del viernes 17. Fue interceptado cuando se dirigía al Canal Trece, en cuyo elenco de comentaristas figura, y sus asaltantes lo forzaron a girar cheques contra su cuenta en Comermex. Una técnica semejante había sido aplicada semanas atrás contra el también periodista Salvador Minjares (cuya señora madre falleció el viernes), que escribe para *La Prensa*, a quien obligaron a extender documentos cobrables en el Banco del Atlántico.

En los círculos gubernamentales no hay plena coincidencia sobre el carácter de esos acontecimientos. Hay quienes suponen que se trata de una serie de hechos unidos por un lazo común, destinados a procurar una desestabilización política, mediante la vía de mostrar a un gobierno incapaz de poner orden no sólo en la economía sino también en la calle, en la vida cotidiana. Otra posición consiste en ofrecer a tales acciones delictivas una explicación más general, y considerar que se trata de incidentes aislados, inconexos, que reflejan el incremento de la delincuencia, motivada a su vez por la situación económica general, cuya combinación de carestía y desempleo lanza a la desesperación a miles de personas, o favorece la realización de delitos patrimoniales o contra la libertad de las personas con fines lucrativos.

Un ejemplo llamativo de esto último lo constituye el caso de la familia norteamericana de origen indostano que publica un aviso dirigido a los secuestradores de su hijo Sunil Punjabi, desaparecido el 21 de febrero del aeropuerto de la ciudad de México, a donde había llegado procedente de Laredo. Dos semanas más tarde, una persona llamó a la familia Punjabi diciendo que tenía consigo al muchacho, pero no ha vuelto a comunicarse, y el padre de la víctima reclama una prueba de que está vivo a fin de considerar las condiciones para el rescate. Otras varias personas, también sustraídas de su vida cotidiana, están a merced de sus captores, en la ciudad de México u otros lugares del país, que esperan el momento de canjear a sus rehenes por gruesas sumas de dinero.

Alguna violencia tiene claros nexos con la alta delincuencia organizada, y sus derivaciones apuntan hacia móviles políticos que probablemente se esclarezcan pronto. Es el caso, por ejemplo, del asesinato del probo director del penal de La Mesa, en Tijuana, Jorge Alberto Duarte Castillo, asesinado hace dos semanas, cuando volvía a su casa, en un automóvil compacto, de regreso de enseñar derecho penal en la Universidad local. Se ha acusado de ser el autor intelectual del homicidio al recluso de aquel establecimiento Antonio Vera Palestina, ex agente policiaco y miembro del personal de seguridad del Hipódromo de aquella ciudad fronteriza, concesionario a Jorge Hank Rhon. Vera Palestina purga una sentencia por el asesinato de Héctor Félix, el periodista apodado *El Gato*, que con Jesús Blancornelas dirigía el influyente semanario *Zeta* en Tijuana. El homicidio de Duarte podría a su vez tener relación con el de Federico Benítez, jefe de la policía municipal tijuanaense, ocurrido hace once meses, y cuya relación con el asesinato de Luis Donald Colosio va configurándose de modo inequívoco. Tal vez el próximo jueves, cuando se cumpla un año

del atentado contra el candidato presidencial priísta, se conocerían al menos las articulaciones entre esos asesinatos, que sólo pudieron ser organizados por un poder eminente y bien dotado de recursos financieros, tan grandes como su inescrupulosidad.

Cualquiera que sea la causa de la actual fase de inseguridad (pretensiones de desestabilización o deterioro de la situación económica), lo cierto es que no contribuirá a aliviarla la puesta en práctica del plan de choque, que generará consecuencias económicas y políticas de gran alcance. Así empezó a percibirse durante el proceso de aprobación de la nueva tasa al impuesto al valor agregado.

El autor de la iniciativa, el presidente Zedillo, tuvo que emplearse a fondo para contener la inconformidad de los legisladores priístas con el incremento de cincuenta por ciento (de 10 a 15 por ciento) a la tasa del IVA, y persuadirlos de votar en pro de este ajuste, "porque no hay de otra". El propio Ejecutivo federal, sin embargo, tuvo que enfrentar el viernes, en Durango, una muestra de la irritación social causada por la medida (así como por el resto del plan de ajuste), cuando una pequeña multitud de panistas lo increpó con gran violencia verbal. Dos días antes, como hemos dicho, el doctor Zedillo había sido perturbado por el incidente ocurrido a su hijo, de modo que en breve lapso quedó enfrentado a muestras concretas de lo que ocurre en la calle, algo que no es siempre percibido con claridad desde el poder. No obstante esas involuntarias tomas de pulso de la situación nacional, el Presidente permanece inmovible en su decisión de aplicar el plan que corresponde al ideario del Fondo Monetario Internacional. Y como si se tratara de un asunto más de voluntad que de inteligencia, más de valen-

**El Ejército Zapatista de Liberación Nacional respondió afirmativamente a la propuesta de nuevo diálogo, y si bien mantiene sus reticencias respecto de la presencia militar en la zona litigiosa y acerca de facultades discrecionales del Ejecutivo, accedió a reanudar el intercambio epistolar con la Secretaría de Gobernación.**

tía que de cordura, dijo que "no le temblará la mano" para poner en práctica el programa, uno de cuyos fines es la creación o mantenimiento del superávit gubernamental.

Si en el pasado reciente todo el esfuerzo de la política económica se dirigió al abatimiento de la inflación, a cualquier precio, ahora el desideratum, en cuyas aras todo se sacrifica, es el equilibrio de las finanzas gubernamentales. A ese propósito se dirigió el dictamen de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que condujo a la aprobación de un IVA mayor, cuyo crecimiento puede ser anulado por sí mismo, ya que esa medida (con el desempleo y la carestía) reforzará la tendencia hacia un menor consumo y por lo tanto puede disminuir la recaudación, en vez de que se incremente su cuantía.

El dictamen incluyó una sorpresiva propuesta, destinada a que se valore la supresión de cuatro secretarías de Estado, las de Turismo, Energía, Reforma Agraria y Contraloría. La sorpresa surge por el momento en que se formula la proposición, no porque contradiga el credo del sector político que hoy gobierna, radicalmente contrario al estatismo. Al menos por su inoportunidad, y por su ineficacia respecto de los fines expuestos, será pertinente el rechazo de esa impertinente recomendación. El personal de base de las dependencias puestas en jaque tendría que ser reubicado en las oficinas que recibieran las funciones respectivas, pues tales funciones no pueden ser responsablemente suprimidas. O se le lanzaría al desempleo, alimentando de ese modo las vastas huestes de quienes no pueden, con su trabajo honesto, asegurar a sus familias la casa, el vestido y el sustento que constituyen los

mínimos indispensables para subsistir. Claro que es materia de discusión la idea de que el Estado debe ser o no un significativo empleador, y en qué magnitud; pero abrir el debate correspondiente en estos precisos momentos, es tan inoportuno como discutir, ante el riesgo de un naufragio, si los grumetes de una embarcación tienen derecho o no a permanecer en la cubierta.

¿Puede permitirse el gobierno el lujo de no promover la afluencia de corrientes turísticas a nuestro país, tan necesitado de las divisas que traen consigo? ¿Puede abandonarse la resolución del rezago agrario, fuente de tantos conflictos sociales, rayanos a menudo en la violencia? ¿Es posible desregular a tal punto la producción y el consumo de energéticos que sea dable prescindir de la autoridad correspondiente? Aparte los controles legislativos del caso, ¿es saludable o no que se vigile el gasto público y se racionalice la actividad administrativa?

En esas preguntas se resumen, en sentido contrario, algunas de las atribuciones asignadas a las oficinas cuya eliminación ha quedado planteada. Si la fe neoliberal del Estado mínimo es obsequiada con tal supresión, pueden generarse problemas mayores que los implicados en el costo que se desea evitar. Y si las responsabilidades inherentes a cada caso son transferidas a otras oficinas, es previsible al menos un periodo de ineficacia por los ajustes operativos que los ensambles de este género provocan inevitablemente.

En realidad, frente a los muchos inconvenientes de suprimir estas oficinas al socaire de la emergencia económica, queda claro que el degüello de este personal burocrático es un ofrecimiento hecho al antiestatismo de un importante sector de la población, y fue una fallida tentativa de revertir el voto panista sobre el incremento del IVA. De conseguirlo, el gobierno y su partido habrían podido atenuar en gran medida el desgaste político, y aun el desprestigio de haber remado a contracorriente a fin de sacar adelante una política a la que son ajenos la mayor parte de los legisladores priístas, incapaces sin embargo de organizar su descontento.

Las tres fracciones minoritarias en la Cámara de Diputados se manifestaron el viernes, sin fisuras, contrarias a la nueva tasa del IVA. Reprodujeron, de ese modo, su rechazo a los planes económicos gubernamentales, ya expresado ante el paquete de asistencia financiera originado en la casa Blanca; esta vez ni los senadores panistas discordaron de la generalizada actitud opositora. Como en San Lázaro, también en Xicotécatl, ayer, sólo el voto priísta aprobó el incremento fiscal, que es aprobar el secamiento de la actividad productiva. En ambas cámaras, un breve número de legisladores miembros del partido oficial rompieron la disciplina partidaria. Independientemente de sus móviles específicos (así como de su biografía y de su talento), su actitud muestra una mejor sintonización con el sentir general que la del resto de sus compañeros, y el presidente de la República.

Por fortuna, esa insensibilidad ha ido cediendo en el otro frente de combate político del gobierno, el del conflicto chiapaneco. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional respondió afirmativamente a la propuesta de nuevo diálogo, y si bien mantiene sus reticencias respecto de la presencia militar en la zona litigiosa y acerca de facultades discrecionales del Ejecutivo, accedió a reanudar el intercambio epistolar con la Secretaría de Gobernación. Ese paso revela que se han depuesto, así sea sólo con fines operativos, las desconfianzas provocadas el 9 de febrero.

Igualmente es importante, en la nueva posición del EZLN, su aval a la comisión legislativa, y a su producto, la de concordia y pacificación. Al quedar integrada la primera, los zapatistas la objetaron, pues la consideraron no órgano imparcial sino acorde con su enemigo, por estar integrada por miembros de partidos antagónicos a su movimiento. Hoy han afirmado que el cometido del grupo parlamentario va más allá de la militancia de sus miembros, lo que probablemente manifiesta un reconocimiento a la fluidez con que se procesaron dentro de la comisión los delicados temas de la pacificación chiapaneca. Es también un reconocimiento a la muy criticada, pero a mi juicio plausible, capacidad presidencial de no aferrarse en este conflicto a una sola opción, sino rectificar cuando sea necesario y oportuno.

Concluyo estas notas, que serán leídas cuando se cumplan diez años de la muerte de don Jesús Reyes Heróles, con una evocación al gran político mexicano, destinada a insistir en la necesidad de gobernar en sintonía con la sociedad, no en contra de ella. El volumen en que reunió sus discursos como presidente del PRI fue titulado, con una frase del prócer liberal zacatecano Francisco García Salinas, "Avancemos con la sonda en la mano". Con ese método, se evita chocar con los obstáculos, pero no se deja de caminar.

Así se consigue gobernar a los ciudadanos, que es la misión de la autoridad, no la de asaltarlos.